



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego

Valparaíso 8 de octubre de 2019.

**H. SENADOR DAVID SANDOVAL PLAZA**  
**PRESIDENTE COMISIÓN ESPECIAL DE ADULTO MAYOR H. SENADO.**  
**PRESENTE.**

Estimado Senador:

Junto con saludarle y, por su intermedio, a los integrantes de la Comisión Especial de Adulto Mayor del H. Senado, vengo en extender cordialmente invitación a esa instancia con el propósito que sesione en una próxima fecha en la Región de Tarapacá a la que represento.

La visita permitirá a los integrantes de la Comisión interiorizarse sobre la particular situación de la población perteneciente a la tercera edad en nuestra región. Según la encuesta de caracterización socioeconómica 2017 (CASEN)<sup>1</sup> lamentablemente un 2,1 de nuestros adultos mayores vive bajo la línea de la pobreza, considerando que un 21,3 % es pobre si se consideran indicadores multidimensionales y de seguridad económica.

---

<sup>1</sup> <http://www.senama.gob.cl/1-tarapaca>



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego

Dada la realidad geográfica e histórica de nuestra región, el 91.3 % de nuestros adultos mayores viven en zonas urbanas y sólo un 8.7% en zonas rurales, cifras que distan considerablemente de la realidad nacional.

En cuanto a la vivienda, el principal problema que afrontamos en Tarapacá, un 9.5% de nuestros abuelitos son allegados y 43,4 % de nuestras mujeres mayores son jefas de hogar.

Finalmente, y como un reflejo del interés del tema en la región, cumplo con señalar a Ud., que la participación en clubes, juntas de vecinos y otras asociaciones comunitarias alcanza el 40% de nuestros adultos mayores. Participación que tanto el Gobierno Regional y esta Senadora apoyamos y queremos seguir fomentando.

Esperando contar prontamente con la presencia de la comisión en nuestra región;

**LUZ EBENSPERGER ORREGO**  
**SENADORA REGIÓN DE TARAPACÁ**

## **ESQUEMA PROYECTO DE LEY**

Boletín 12.250-25

El proyecto modifica la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y el Decreto Ley N° 2.460, de 1979, del Ministerio de Defensa Nacional, Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile:

- 1). Para incorporar el principio de probidad administrativa funcionarios de carabineros y policía de investigaciones.
- 2). Circunscribir su actuar a sus facultades legales y respeto a los derechos humanos. (y no trato discriminatorio).
- 3). Obligación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, al menos semestralmente, la cantidad de personal de la institución, dando cuenta de su desagregación y cobertura, tanto a nivel regional como comunal al Congreso Nacional. (en carácter de reservado).
- 4). Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones deberán elaborar Plan Estratégico de Desarrollo Policial, el cual contemplará un período de ejecución de a lo menos ocho años (actualizado cada 4 años).
- 5). Carabineros y la Policía de Investigaciones desarrollar el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa. (supervigilancia del Alto Mando policial y la Subsecretaría del Interior).
- 6). Obligación de Carabineros y la Policía de Investigaciones de publicar información estadística desgregada a nivel local.
- 7). Crea un sistema para la interposición, tramitación y resolución de reclamos de parte de la ciudadanía.
- 8). El personal de Carabineros y de la Policía de Investigaciones tendrá derecho, además, a ser defendido y a solicitar, previa autorización del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que la institución persiga la responsabilidad civil y criminal de las personas que atenten contra su vida o su integridad corporal, con motivo del desempeño de sus funciones.
- 9). Existirá una Alta Repartición encargada de la función de auditoría interna, dependiente directamente del General Director y a cargo de un General, cuya finalidad será controlar las operaciones financieras y contables, así como proponer los objetivos institucionales de auditoría y otras acciones orientadas al uso eficiente y eficaz de los recursos financieros de la institución.
- 10). Las policías cumplirán con las órdenes impartidas por los fiscales del Ministerio Público en el marco de investigaciones penales y no sólo colaboración.

Finalmente, el artículo 3º del proyecto de ley, modifica la la ley N° 20.502, Crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, y modifica diversos cuerpos legales, para concordar las modificaciones introducidas.

El artículo primero transitorio dispone que la ley comenzará a regir 6 meses después de su publicación en el diario oficial.



H. Senadora Luz Ebersperger O.

### **MINUTA BOLETÍN N° 12.524-06**

Denominación:	Proyecto de ley que modifica el artículo 74 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, respecto de las inhabilidades de los consejeros regionales para ser candidatos a alcalde y concejal.
Origen:	Moción
Trámite	1° Constitucional H. Senado (Comisión de Gobierno).
Urgencia	Acuerdo de Sala
Otros comentarios	Discusión en Particular (segunda discusión)

### **INTERVENCIÓN SUGERIDA:**

Presidente:

Un principio básico de la lógica política -refrendado en la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por nuestro país- es el derecho de los ciudadanos a postular a todos los cargos y empleos públicos en igualdad de condiciones. Siguiendo ese principio resulta obvio que quién detenta un cargo, tiene una autoridad o maneja determinados fondos públicos parte, presidente, con una ventaja difícil de superar.

Ese es el sentido presidente del sistema de inhabilidades del que hablé largamente en el día de ayer resulta una excepción en nuestro ordenamiento, una excepción que permitía decir a todos: la autoridad no usará su poder y los fondos para ganar una elección en una cancha que no sería pareja.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Presidente, aún con solo el derecho a voz 30 días antes de la elección, los consejeros regionales mantendrán hasta su dieta, por lo que en definitiva tendremos a candidatos a sueldo, sin obligaciones, haciendo campaña, pero pagados con recursos de todos.

Los aquí presentes, y particularmente los que hemos desempeñado un cargo en un gobierno regional o en una municipalidad, sabemos la importancia y la influencia que pueden alcanzar los Consejeros Regionales, la que ciertamente aumenta en época electorales por la importancia y los montos de los proyectos sobre los que deben pronunciarse.

No puedo dejar de mencionar presidente que el texto propuesto podría implicar también una serie de problemas prácticos, imaginen los honorables señores senadores un Gobierno Regional donde la mayoría de los consejeros regionales se inscriben como candidatos ¿es que acaso quedaría inmovilizado el Gobierno Regional?; o, ¿que sucederá con las primarias para estos cargos? Podrá un Consejero Regional -en ejercicio de su cargo- presentarse a primarias? ¿no generará eso una desigualdad aún antes de la elección definitiva? Podría incluso plantearse la inconstitucionalidad de la norma porque atentaría contra la igualdad ante la ley y los derechos de todos los ciudadanos para presentarse y ser electos en un cargo de representación.

Por lo mismo presidente, es que la indicación de mi autoría (Nº 6 del boletín de indicaciones del proyecto) **que modifica la ley orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional** de manera de permitir a alcaldes y concejales de competir en igualdad de condiciones a los cargos de Consejeros Regionales y Gobernadores Regionales, emparejando al menos en un mismo nivel la cancha entre



H. Senadora Luz Ebensperger O.  
los candidatos.

Presidente, para finalizar e independiente del resultado final de la votación, aquí quiero lamentablemente invitar a hacer una autocrítica a este Senado, -en particular la comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización- de la cual soy parte: No escuchamos a algunos de los principales interesados: los alcaldes, los concejales y sus asociaciones. Eso se podría haber solucionado si en el trámite en particular el proyecto hubiese regresado a la comisión de gobierno que lo vio en general y no lo estuviéramos votando solamente con el informe de la comisión de constitución.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

### BOLETÍN 12.917-03

Denominación:	Modifica la Ley General de Bancos y el Código de Procedimiento Civil para establecer el avalúo comercial de los bienes raíces como mínimo de las subastas y proteger la vivienda única de los deudores que indica por medio de la prenda pretoria.
Origen:	Moción (Senadores Elizalde, Provoste, Rincón, Huenchumilla y Pizarro).
Trámite	1º Constitucional H. Senado/ comisión de economía
Urgencia	Acuerdo de Comités
Otros comentarios	-Discusión en general* -La comisión fue autorizada a conocer el proyecto en general y en particular a la vez. **

### MINUTA.

El proyecto de ley modifica fundamentalmente dos normas el Código de Procedimiento Civil y la Ley General de Bancos. En cuanto al primer cuerpo legal, modifica el Título I del Libro III sobre los juicios ejecutivos de dar con el propósito principal de a). Para el caso que la ejecución caiga sobre un bien raíz que constituye la vivienda del deudor o su familia (circunstancia acreditada por el ministro de fe a cargo de la notificación y que podrá abrir un incidente especial), y éste haya pagado más de la mitad (50%) del capital, vedar el banco pueda solicitar el remate del inmueble sino la prenda pretoria. Estableciendo que todo pacto en contrario será nulo; y, b). Que la venta de los bienes raíces en pública subasta tendrá como mínimo el equivalente a su valor comercial determinado mediante tasación pericial. En el





H. Senadora Luz Ebensperger O.

mismo sentido se modifican los artículos 103 y 104 de la Ley General de Bancos que se insertan en el título de las operaciones hipotecarias con letras de crédito.

En primer lugar desde ya puede advertirse que la comisión no escuchó durante el trámite en general (aunque fue autorizada también a tramitar el proyecto en particular) a ningún abogado o profesor universitario experto en derecho procesal civil, opiniones expertas que sería dable recibir así como de las instituciones financieras -no sólo bancos- sino también por ejemplo a sociedades de leasing habitacional, al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a la Comisión para el Mercado Financiero, a los jueces civiles e incluso al Banco Central de Chile.

Hace tiempo los procedimientos judiciales por el cual se persigue el cumplimiento de una deuda (comúnmente llamados procedimientos de ejecución) requieren una revisión profunda de las normas contenidas en el Código de Procedimiento Civil especialmente referidas a la notificación de la demanda y el mandamiento de ejecución y embargo; el catalogo de excepciones, la administración de bienes comunes y la pública subasta.

Nuestros tribunales civiles presentan en la parte operativa una sobrecarga de trabajo en estas materias referentes a la tramitación de incidentes que guardan relación con las deficiencias de estas normas, pero también con la existencia de un mercado oscuro en los remates, que opera hasta cierto punto en las sombras y ocupando los vacíos de nuestra legislación o la diferencia de criterios entre uno u otro tribunal, y que beneficia de la falta de transparencia y publicidad.

En este orden de ideas, el contrato de prenda pretoria (o anticresis judicial de los artículos 500 y s.s. del C.P.C.) que remite al Título XXXIX del Libro IV del Código



H. Senadora Luz Ebensperger O.

Civil, (artículos 2435 y s.s.), y consiste en la entrega al acreedor un bien raíz para que se pague con sus frutos (por ej. rentas de arrendamiento), resulta más bien un contrato en desuso que en todo caso no dice relación con el objeto de los bancos, esto es, captar dinero del público con la obligación de restituirlo y otorgar crédito a sus clientes, giro que justifica que estén fuertemente fiscalizados.

El trámite legislativo de este proyecto puede servir, una vez escuchados los expertos necesarios, con los objetivos de agilizar los procedimientos conforme a la garantía de un justo y racional procedimiento, mejorar las defensas de los deudores hipotecarios, reglar la administración de los bienes embargados y transparentar los remates judiciales.

Lo dicho sobre la oportunidad del proyecto se entiende no obstante bajo la única y gran condición que el mayor costo que puede traer una nueva regulación no cause como reacción que las instituciones financieras califiquen a nuestros deudores con mayores riesgos y los castiguen con un interés o un costo más alto. El precio de las casas y departamentos es ya lo suficientemente alto como para que como consecuencia de una ley suban aún más.

Con cuidado deben analizarse la situación de las letras de créditos hipotecarias de los bancos puesto por tener características propias especiales y porque su modificación involucra las atribuciones del Banco Central de Chile en la materia. El tenor del artículo 92 de la Ley General de Bancos y 35 N° 1 de su ley Orgánica Constitucional, no deja lugar a dudas: debe escucharse en este proyecto al Banco Central de Chile. El Instituto Emisor establece las normas sobre préstamos hipotecarios mediante la emisión de letras de crédito.



H. Senadora Luz Ebensperger O.

La operación de las letras consiste en que el banco capta del público dinero por medio de la emisión de letras de créditos homogéneas con igual interés y amortización y entrega a su deudor hipotecario ese capital, quién se obliga a su vez a pagarlo en cuotas periódicas que permiten al banco ir amortizando, es decir, pagando, el crédito. Desde luego la obligación del deudor para con el banco y la del banco con el tenedor de la letra son independientes, de manera que el cambio propuesto podría afectar la solvencia de los bancos, de ahí que en caso de los procedimientos de resolución bancaria (el procedimiento de insolvencia de los bancos modificada recientemente por la ley 21.130 que moderniza la legislación bancaria) las letras de hipotecarias tienen un procedimiento de liquidación un procedimiento propio que lo separa del resto del patrimonio de la empresa en crisis.(art. 134 L.G.B).

También corresponde señalar que conforme al Título V del D.F.L N° 251, las compañías de seguros pueden adquirir mutuos hipotecarios endosables del 67 N° 5 garantidos con hipotecas, por lo que el cambio en las reglas puede tener consecuencias en la determinación de reservas técnicas y patrimonio de riesgo de esas empresas.

Por lo dicho, se sugiere el proyecto vuelva a la comisión para un nuevo primer informe y en esa oportunidad (o durante el trámite en particular) se escuche particularmente a jueces civiles, la Comisión para el Mercado Financiero y el Banco Central de Chile.



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego.

N° de Boletín:	13.010-05
Proyecto de ley:	Faculta al Presidente de la República para dejar sin efecto o limitar un alza de tarifas en el transporte público de pasajeros, en las condiciones que indica.
Origen:	Mensaje
Urgencia:	Discusión inmediata
Comisión:	Hacienda.
Tramitación:	2° trámite constitucional. (en general y en particular a la vez)
Otras consideraciones	Se acompaña evaluación del Sistema Transantiago en los últimos años.

### **CONSIDERACIONES.**

El artículo único del proyecto de ley faculta al Presidente de la República para dejar **sin efecto o limitar** el aumento de tarifas dispuesto por el panel de expertos de la ley N° 20.378, que Crea un Subsidio Nacional para el Transporte Público Remunerado de Pasajeros, en especial consideración a la última alza de 6 de octubre en curso.

El artículo transitorio del proyecto imputa el mayor gasto fiscal a la partida del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y del Tesoro Público. En el informe financiero acompañado al proyecto, la dirección de presupuesto estima el mayor gasto fiscal en 3500 millones de pesos para el año 2019.



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego.

El artículo 3° transitorio de la ley N° 20.378, autoriza entre los años 2012 a 2022 un aporte especial para el transporte, conectividad y desarrollo regional \$360.000.000 miles anuales considerados en la ley de presupuesto. Ese monto se divide en partes iguales entre las Provincia de Santiago, las comunas de San Bernardo y Puente Alto; y, las demás regiones del país (los denominados Fondos Espejo del Transantiago). A este respecto, el panel de expertos se pronunciará cada dos años sobre la pertinencia y montos de los subsidios establecidos en esa norma.

El panel de expertos conforme lo dispone el artículo 6° de esa disposición estará conformado por tres integrantes, que durarán seis años en sus cargos, dos de los cuales serán nombrados por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, cada uno a partir de una terna propuesta por el Consejo de Alta Dirección Pública y uno directamente por el por el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a partir de una terna propuesta por los Decanos de las Facultades de Ingeniería y de Economía y Administración de las universidades acreditadas. Actualmente se encuentra conformado por Juan Enrique Coeymans Avaria (Ingeniero Civil); Claudio Andrés Agostini González (Ingeniero Comercial/ economista) ; y, Juan-Pablo Montero (Ingeniero Civil).<sup>1</sup>

Entre las funciones encomendadas al panel, se encuentra conforme a la letra a) del artículo 14 de la misma ley, determinar trimestralmente el ajuste de tarifas del sistema de transporte público de la Provincia de Santiago y de las comunas de San Bernardo y Puente Alto, requerido para

---

<sup>1</sup> <http://www.paneldeexpertostarifas.cl/quienes.php>



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego.

mantener el valor real de éstas, de acuerdo a la metodología que será establecida en un reglamento emitido a través del Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, el que también será suscrito por el Ministro de Hacienda.

Conforme agrega esa misma disposición legal, dicha metodología deberá dar cuenta de las variaciones de los costos del sistema de transporte público remunerado de pasajeros, de forma de no incrementar la diferencia entre costos e ingresos del sistema.

Resulta del caso señalar que conforme al inciso quinto del artículo 15 de la Ley 20.378. el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones puede modificar la estructura tarifaria mediante un decreto fundado, siempre que la modificación no reduzca los ingresos totales del sistema de transporte público, situación que no concurre en la especie por lo que se hace necesaria la modificación legal hoy en estudio.

El Transantiago, actualmente la red metropolitana de movilidad (desde marzo de 2019), fue introducido mediante sucesivas modificaciones a la ley N° 18.696, que Modifica el Artículo 6° de la Ley N° 18.502, Autoriza Importación de Vehículos que Señala y Establece Normas sobre Transporte de Pasajeros, por las leyes N°s 19.110 y 19.453. Esas modificaciones dicen razón con los sistemas de licitación de vías exclusivas para el sistema de transporte público y las normas aplicables a la congestión vehicular, respectivamente, que rigió desde el inicio de las operaciones del Transantiago hasta la dictación de la Ley 20.378 que contempló el subsidio permanente del Estado a ese medio de transporte.



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego.

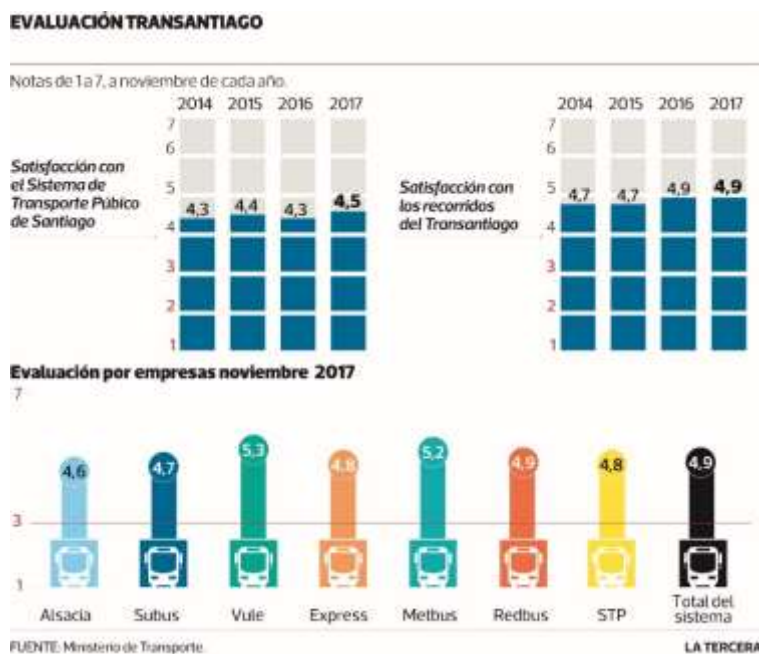
Entre las diversas modificaciones legales que introdujo la Ley 20.378, corresponde consignar la introducción de un nuevo artículo 3° sexies a la Ley 18.696, en virtud del cual se otorgó rango legal a la concesión meramente administrativa, al disponerse que las bases de licitación y los contratos de concesión podrán considerar, si así se estima pertinente por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, los bienes y derechos afectos a la concesión, los cuales al término de ella deberán ser transferidos a quién se indique en la respectiva concesión, estableciéndose expresamente además que las concesionarias quedan sujetas a la supervigilancia y control del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

A su vez, la empresa Metro S.A. se rige por las disposiciones de la Ley N° 18.772, que Establece las Normas para Transformar la Dirección General de Metro en Sociedad Anónima, y que en su artículo 1° autoriza al Estado para desarrollar actividades empresariales de servicio público de transporte de pasajeros, mediante ferrocarriles metropolitanos urbanos y suburbanos u otros medios eléctricos complementarios, mediante buses o taxibuses, de cualquier tecnología, que presten servicios de transporte público de pasajeros en superficie, y servicios anexos.

Resulta también pertinente señalar que el Transantiago inició su implementación durante el primer gobierno de la ex presidente Bachelet, al respecto en su cuenta pública de 21 de mayo de 2006, esa autoridad refirió: “La calidad de vida está también asociada a la modernización de nuestros sistemas de transporte público. Tenemos un compromiso con la plena aplicación del Plan Transantiago. El país ha visto cómo hemos enfrentado con decisión este tema, para asegurar que esté funcionando en febrero de 2007. Ese ambicioso plan, cuando esté operando en régimen, dará un servicio de



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego.  
muchacha mayor calidad y seguridad a los usuarios, con menos congestión y –  
algo importante– con menos contaminación”.<sup>2 3</sup>



Finalmente, el Presidente Piñera se comprometió a terminar con el que denominó fracasado Transantiago en 10 años y reemplazarlo por un nuevo sistema denominado Transporte Tercer Milenio, que aumentará los trenes urbanos y la red de Metro, modernizará la flota de buses y generará infraestructura para integración multimodal que incluirá tren, bus, automóvil, taxis colectivos y bicicleta. El plan contempla extender la red de Metro en 125 kilómetros, de forma de que la mitad de la población viva a una distancia caminable de una estación.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Discurso 21 de mayo de 2006 P.15

<sup>3</sup> <https://www.latercera.com/nacional/noticia/percepcion-transantiago-mejora-llega-nota-45/68460/>

<sup>4</sup> Programa Presidencial Sebastián Piñera (2018-2022) p. 178.



## MINUTA VIVIENDA

En agosto último, la Cámara Chilena de la Construcción publicó el Índice de Acceso a la Vivienda (*Price Income Ratio- PIR*), un indicador internacional que mide la relación entre el precio promedio de las viviendas y el ingreso promedio de los hogares. Ese Índice estima la cantidad de años que necesita un hogar de ingreso promedio para financiar totalmente una vivienda de precio también promedio. El precio promedio para Chile se obtuvo en base a datos de las Encuestas Inmobiliarias de la CChC, que para 2019 alcanzó 3.089 UF.

Los resultados del índice muestran que un hogar chileno requiere dedicar 7,6 años de la totalidad de sus ingresos para pagar integralmente su vivienda. En comparación los hogares de Nueva Zelanda que requieren de 6,5 años; Australia 5,7; Reino Unido 4,8; Singapur 4,6; Canadá 4; Irlanda 3,7; y, Estados Unidos 3,5.

En nuestro país, el índice arrojó altos valores en el precio promedio de vivienda en el mercado privado, liderando el listado la ciudad de Temuco (PIR) 8,8; el Gran Concepción 7,7; Gran Santiago con 7,4; La Serena 7,3; y, Gran Valparaíso con 7,1.

Desde ya es posible afirmar que el constante aumento en los precios y la dificultad de acceso a la vivienda puede palearse con una planificación urbana integrada que asegure la provisión de suelo urbano para mantener una adecuada oferta de viviendas; una densificación equilibrada e inclusiva en las zonas aledañas a la infraestructura pública, como por ejemplo el metro, y nuevas e innovadoras políticas públicas como leasing habitacional o una política de arriendos dirigidas a la clase media.

El déficit de vivienda por región, según el detalle del Observatorio Urbano del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, corresponde a:

Región	TOTAL DÉFICIT HABITACIONAL	
	2002	2017
Total País	521.957	393.613
Arica y Parinacota	7.818	8.785
Tarapacá	13.095	13.705

<b>Antofagasta</b>	<b>20.320</b>	<b>21.172</b>
<b>Atacama</b>	<b>8.682</b>	<b>7.961</b>
<b>Coquimbo</b>	<b>20.556</b>	<b>16.421</b>
<b>Valparaíso</b>	<b>45.194</b>	<b>34.615</b>
<b>Metropolitana</b>	<b>232.268</b>	<b>154.608</b>
<b>O'Higgins</b>	<b>27.515</b>	<b>16.836</b>
<b>Maule</b>	<b>30.863</b>	<b>19.390</b>
<b>Ñuble</b>	<b>12.799</b>	<b>9.239</b>
<b>Biobío</b>	<b>41.209</b>	<b>26.666</b>
<b>La Araucanía</b>	<b>24.440</b>	<b>20.617</b>
<b>Los Ríos</b>	<b>10.854</b>	<b>12.406</b>
<b>Los Lagos</b>	<b>20.938</b>	<b>25.776</b>
<b>Aysén</b>	<b>2.516</b>	<b>1.793</b>
<b>Magallanes</b>	<b>2.890</b>	<b>3.623</b>

1. Ha sido posible constatar la dispersión reglamentaria en la materia, la existencia de criterios poco claros en la asignación de recursos y desconocimiento de las fechas y el proceso por parte de potenciales interesados.

Actualmente, las políticas habitacionales del gobierno dirigidas a la clase media se contienen fundamentalmente en tres instrumentos: el Decreto Supremo N° 1 de 2011 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Aprueba Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y Deroga el D.S. N° 40, de 2004, y el Capítulo Segundo del D.S. N° 174, de 2005; el Decreto Supremo N° 19 de 2016 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que Reglamenta el Programa de Integración Social y Territorial y Modifica el D.S. N° 1 (V. Y U.), de 2011, Reglamento del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional; y, el Decreto Supremo N° 120 de 1995 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que Reglamenta los Títulos III, IV y V de la Ley N° 19.281 sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa.

Es del caso señalar que no se incluye directamente el subsidio de arriendo de vivienda regulado por el Decreto Supremo N° 52 de 2013 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, puesto que en criterio de esa autoridad y conforme al propósito del está destinado a dar una solución habitacional transitoria, a familias pertenecientes hasta el 70% más vulnerable de la población nacional de acuerdo a los instrumentos de caracterización socioeconómica.

El presupuesto del Ministerio de Vivienda para el año 2020 de los diferentes programas que benefician a la clase media corresponde al siguiente detalle:

Programas	Presupuesto 2019	Presupuesto 2020
-----------	------------------	------------------

Subsidios vivienda clase media y segmento emergente	Unidades	Costo total UF	Unidades	Costo total en UF
Sistema Integrado de Subsidios	45.097	19.585.403	45.097	20.155.710
Leasing	18.397	7.340.403	18.397	7.910.710
Subsidio Integración Social y Territorial	25.000	11.650.000	25.000	11.650.000

Esos instrumentos permiten al MINVU otorgar un subsidio habitacional destinado a financiar la adquisición de una vivienda económica, nueva o usada, urbana o rural, o la construcción de ella en sitio propio, o en densificación predial, para destinarla al uso habitacional del beneficiario y su núcleo familiar.

Los beneficiarios son las familias vulnerables y las familias de sectores medios, entendiendo por éstas últimas a las familias de más del 50% hasta el 90% más vulnerable de la población nacional de conformidad a la información que se obtenga de la aplicación de los instrumentos de caracterización socioeconómica.

El precio máximo de las viviendas, el valor de los subsidios y el ahorro mínimo requerido corresponde al siguiente detalle:

Emplazamiento de la vivienda	Precio vivienda U.F.	Monto Subsidio U.F. (*)	Monto máximo subsidio U.F.	Monto mínimo subsidio U.F.	Ahorro mínimo U.F.
a) Viviendas emplazadas en todas las regiones, provincias y comunas del país, excepto las señaladas en las letras b), c) y d).	Hasta 2.200	$725 - 0,375 \times P$	275	125	
b) Viviendas emplazadas en las Regiones de Arica y Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta y de Atacama.	Hasta 2.400	$775 - 0,375 \times P$	287	140	40 UF para viviendas de hasta 1.400 UF (precio)
c) Provincia de Chiloé y territorios incluidos en el plan de desarrollo para territorios rezagados del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, conforme al D.S. N° 1.116, de ese Ministerio, de 2014.		$825 - 0,375 \times P$	337		80 UF para viviendas de más de 1.400 UF (precio)
d) Viviendas emplazadas en las Regiones de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, de Magallanes y Antártica Chilena; provincia de Palena; comunas de Isla de Pascua y de Juan Fernández.		$900 - 0,375 \times P$	412		

Se contemplan además un subsidio para desarrollo del Plan de Integración Social y Gastos Operacionales 5 UF, y el bono de integración social (hasta 240 UF en el caso de familias vulnerables) y para familias de clase media conforme al siguiente detalle:

<b>% de familias vulnerables incorporadas al proyecto.</b>	<b>Bono por integración para familias de sectores medios UF.</b>
Desde 20% hasta un 25%	100 UF
Más de 25% hasta 30%	200 UF
Más de 30% hasta 35%	250 UF
Más de 35% y hasta 60%	300 UF

Y un bono por captación de subsidios conforme al siguiente detalle:

<b>% de subsidios captados respecto del total de viviendas del proyecto</b>	<b>Bono por Captación de Subsidio para Familias Vulnerables U.F.</b>	<b>Bono por Captación de Subsidio para Familias de Sectores Medios U.F.</b>
Desde 5% y hasta 20%	50	50
Más de 20% y hasta 30%		100
Más de 30% y hasta 40%		150
Más de 40%		200

En el caso de créditos hipotecarios complementarios, es posible otorgar los beneficios de subsidio a la originación y una subvención mensual al dividendo por pago oportuno.

2. Al momento de contratar un crédito hipotecario, el deudor debe hacer frente a un sinnúmero de gastos que, aunque podrían estimarse escaso monto e importancia, causan -por el momento donde se originan- un impacto económico significativo.

El gasto más relevante sin duda se trata de la obligación de declarar y enterar el impuesto al mutuo. Conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 5º del Ley N° 3.475 de 1980, Impuesto de Timbres y Estampillas (Impuesto documental), constituye el hecho típico gravado de ese impuesto la compraventa, permuta, dación en pago o cualquiera otra convención traslativa de dominio de bienes inmuebles o de cuotas que recaigan sobre los mismos, aplicando sobre el

valor del contrato una tasa del 0,8%, tratándose de un crédito sin el beneficio del D.F.L N° 2; y, del 0,2% del crédito si se cuenta con el beneficio del D.F.L. N°2.

Al pago del impuesto documental, que se entera generalmente en la institución bancaria o en la Tesorería General de la República, hay que incluir los costos de de tasación de la propiedad (entre 2,2 a 3 UF dependiendo del valor de la propiedad); el estudio de títulos (3,5 UF); la redacción del borrador de la escritura (2,5 UF), gastos notariales (3,5 UF) y el pago del arancel del Conservador de Bienes Raíces (0,8% del valor de la propiedad).

3. La carga fiscal de adquirir y mantener una vivienda resulta excesivamente onerosa.
  - i) Debe estudiarse la conveniencia de cambiar la definición de vivienda económica contenida en el Decreto Supremo N° 1.101 del Ministerio de Obras Públicas que Fija el Texto Definitivo del Decreto con Fuerza de Ley N° 2 del año 1959, sobre Plan Habitacional, que entiende por tal las que se construyan en conformidad a sus disposiciones, tengan una superficie edificada no superior a 140 metros cuadrados por unidad de vivienda y reúnan los requisitos, características y condiciones que determine el Reglamento Especial que dicte el Presidente de la República. (art. 1°).
  - ii) Toda revisión del concepto de vivienda económica incide en los beneficios que gozan ese tipo de viviendas, entre otras, la rebaja del 50% en el pago de las contribuciones de bienes raíces por un mínimo de 10 años tratándose de construcciones entre los 100 a 140 metros cuadrados (art. 14).
  - iii) Convendría también modificar o ampliar el artículo 16 de ese cuerpo legal. Dispone ese artículo que las viviendas económicas y los derechos reales constituídos en ellas, que se transmitan por sucesión por causa de muerte o sean objeto de donación, serán excluidos de la aplicación del Impuesto de Herencias, Asignaciones y Donaciones. Pero agrega a continuación que las exenciones establecidas se aplicarán únicamente cuando los causantes o donantes hayan construido las viviendas económicas o las hayan adquirido en primera transferencia.
  - iv) El artículo vigésimo octavo del proyecto que moderniza la legislación tributaria (Boletín N° 12.043-05) extiende el beneficio de rebaja del impuesto territorial correspondiente a propiedades de adultos mayores vulnerables económicamente establecida por la Ley N° 20.732, actualizando los valores allí expresados, por lo que correspondería acelerar su tramitación.

- v) Fue común durante el último proceso de reavalúo de las propiedades el desconocimiento del aumento de valor de este, por lo resultaría conveniente revisar los mecanismos de información de estos y el procedimiento, plazos y causales de reclamación judicial y administrativa (art. 149 del Código Tributario).
  - vi) La jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República ha obligado a los municipios a cobrar por vía judicial derechos de aseos que evidentemente por el plazo transcurrido se encuentran prescritos, lo que en la practica se traduce en demandas de los municipios a sus vecinos, notificaciones innecesarias y una conciliación parcial. Se sugiere, con las medidas de control necesarias, facultar a los municipios a renunciar a dicho cobro.
4. Revisar los efectos de la Ley 21.078 sobre Transparencia del Mercado del Suelo e Impuesto al Aumento del Valor por Ampliación del límite urbano, y, el IVA a las viviendas.

En particular, con la primera de esas leyes se agregó un nuevo artículo 28 quinquies a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que establece normas urbanísticas supletorias para territorios sin planificación comunal o seccional, que entre otras cosas, limita la cantidad de pisos de los edificios en relación a las manzanas ya edificadas, la densidad promedio de las mismas y de entorno urbano y características arquitectónicas del lugar.

Además, el artículo 4º de esa disposición estableció la Ley sobre Incrementos de Valor por Ampliaciones de los Límites Urbanos, que en su artículo 1º grava con impuesto a la renta con una tasa del 10%, la parte del mayor valor obtenido en aquellas enajenaciones a título oneroso de bienes raíces situados en Chile, derechos reales constituidos en ellos, o de cuotas poseídas en comunidad respecto de tales bienes, que se encuentren en zonas incluidas en un proceso de ampliación del límite urbano, con lo que en definitiva se podría penalizar en términos más gravosos que las disposiciones de la ley de la renta la venta de terrenos que han experimentado un alza (mayor valor) como producto de un cambio en la categoría de suelo, a la vez que se castiga por vía del impuesto territorial el mantener dichos terrenos, lo que resulta contraproducente. Se sugiere incentivar la venta y disponibilidad en el mercado de dichos terrenos aliviando la carga fiscal sobre los propietarios que experimentaron un alza por el cambio de categoría de uso de suelo.

Finalmente, se sugiere especialmente revisar el impacto que ha tenido el gravar con Impuesto al Valor Agregado (IVA) la venta de bienes corporales muebles e inmuebles que formen parte del activo inmovilizado de la empresa, siempre que, por estar sujeto a las normas de este título, el contribuyente haya tenido derecho a crédito fiscal por su adquisición o construcción, y la forma en que una eventual rebaja de ese impuesto podría transmitirse y beneficiar directamente a la clase media.

### **RECOMENDACIONES**

- I. Simplificar la convivencia y coordinación de múltiples instrumentos de planificación territorial tales como el Plan Regional de Desarrollo Urbano, el Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, al Plan Regulador Comunal, al Plan Seccional y al Límite Urbano, de manera de asegurar la disponibilidad de suelos para construcción de viviendas, por ejemplo condicionando la instalación de nueva infraestructura urbana (metro, alcantarillado o electrificación) a la disponibilidad de terrenos para viviendas.
- II. Por la imperiosa necesidad de dotar al sector construcción de seguridad jurídica, es urgente establecer una autoridad central en materia de planificación territorial con el poder suficiente de revisar y enmendar las decisiones de los actuales intervinientes. A mayor abundamiento y sólo por la vía ejemplar, los próximos gobiernos regionales una vez en vigencia las modificaciones de la Ley 20.074 al D.F.L N° 1 de 2005, del Ministerio del Interior, que Fija el Texto Refundido, Coordinado y Sistematizado y Actualizado de la Ley N° 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, tendrán transferidas las competencias en la elaboración y aprobación del Plan Regional de Ordenamiento Territorial.
- III. En carácter de urgente, se sugiere terminar con la dispersión normativa en reglamentos y circulares e instrucciones del MINVU sobre el propósito, monto y criterios de asignación de los beneficios habitacionales. Dando también amplia difusión a los períodos y fechas de postulación. Podría resultar políticamente conveniente elevar al menos los criterios de asignación de subsidios a rango legal diferenciándolos claramente como aquellos que favorecen a la clase media.
- IV. Profundizar alternativas innovadoras a los requerimientos de vivienda tales como la utilización condicionada a cierto tipo de proyectos de inmuebles de propiedad fiscal o municipal, el subsidio de arriendo a la

clase media, el leasing habitacional para las familias que hoy tienen capacidad de arrendar pero no adquirir, el financiamiento CORFO a algunas de esas iniciativas, o, la regulación de la actividad de corretaje de propiedades (Boletín 10.391), lo que permitiría por ejemplo sincerar los costos propios del contrato de la remuneración del corredor, entre otras.

- V. La fiscalización de los valores que están efectivamete cobrando los Notarios y Conservadores de Bienes Raíces, la necesidad de actualizar a la baja los mismos, la supresión del impuesto de timbres y estampillas para la compraventa de inmuebles bajo determinado valor, prohibir a las instituciones financieras imputar el costo de redacción de escrituras - propios de la labor del banco a fin de garantizar su crédito- o la tasación - elemento que corresponde al análisis de riesgo del crédito- al deudor, o al menos, informar con claridad del coste de esos servicios en términos iguales o superiores al Decreto N° 42 del Ministerio de Economía que Aprueba el Reglamento sobre Información al Consumidor de Créditos Hipotecarios.
- VI. Actualizar el elenco de beneficios de la primera vivienda, pudiendo incluso, independizarlo del concepto de vivienda económica contenida en el D.F.L. N° 2 de 1959; declarar exento del impuesto de sucesiones por causa de muerte la transmisión de toda vivienda bajo cierto valor sin importar si es la primera transferencia o no; tramitar por vía separada a la modernización tributaria la rebaja de las contribuciones a los adultos mayores; informar y tornar eficientes de los mecanismos de impugnación del reavalúo de las propiedades; y, permitir a las municipalidades renunciar al cobro de derechos de aseo prescritos.
- VII. Revisar la tributación a la que se encuentra afecto un propietario de un bien raíz que producto de un cambio en el instrumento de planificación correspondiente ha visto incrementar el valor de su propiedad, de manera que le resulte conveniente, -en relación a las tasas del impuesto a la renta, vender dicho terreno y no mantenerlo.
- VIII. En la medida que redunde en una baja efectiva en el precio para los compradores, eliminar o rebajar el IVA a la compra de viviendas.



Resolución exenta N° \_\_\_\_\_

ASIGNA NUEVA CLASIFICACIÓN A  
BEBIDA ALCOHÓLICA FERMENTADA EN  
EL REGISTRO DE BEBIDAS  
ALCOHÓLICAS PARA SU ELABORACIÓN  
Y COMERCIALIZACIÓN.

Santiago, 12 de octubre de 2019.

**VISTOS:**

La Ley N° 18.755, Orgánica del Servicio Agrícola y Ganadero; la Ley N° 18.455 que fija normas sobre Producción, Elaboración y Comercialización de Alcoholes Etílicos, Bebidas Alcohólicas y Vinagres; el Decreto N° 78, de 1986, del Ministerio de Agricultura, que reglamenta la Ley N° 18.455; y la Resolución N° 1600, de 2008, de la Contraloría General de la República;

**CONSIDERANDO:**

1. Que, el Servicio Agrícola y Ganadero tiene por objeto contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante el control de insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación;
2. Que, la Ley N° 18.455, fija normas sobre producción, elaboración, y comercialización de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres;
3. Que, el referido cuerpo legal otorga competencias al Servicio Agrícola y Ganadero de fiscalización en materias de producción, elaboración, envasado, guarda, comercialización, importación, exportación y transporte de alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres;
4. Que, el artículo 59 del Decreto Supremo N° 78 de 1986, del Ministerio de Agricultura, establece la obligación del Servicio Agrícola y Ganadero de mantener un registro de bebidas alcohólicas que se comercialicen en el país y dispone, a mayor abundamiento, que aquellos productos que no se encuentren inscritos en el registro no podrán ser comercializados en el país;
5. Que, ese mismo Reglamento faculta al Servicio Agrícola y Ganadero para asignar otra clasificación distinta a las establecidas siempre que los productos de que se trate

tengan una composición genérica significativamente diferente o si en su proceso se consideran factores humanos como elemento diferenciador;

6. Que, mediante Resolución N° 24/15 del 11 de mayo del 2015, este Servicio registró en favor de la Universidad Arturo Prat la variedad de uva Tamarugal conforme a las disposiciones de la Ley N° 19.342, que regula derechos de obtentores de nuevas variedades vegetales.
7. Que, a los esfuerzos realizados por la Facultad de Recursos Naturales Renovables de la Universidad Arturo Prat, por medio de su proyecto y equipo “Vino del Desierto”, han permitido producir no sólo vino a partir de la cepa Tamarugal, sino que además con cepas relictas, adaptadas a condiciones del desierto más árido del mundo, rescatadas en la región de Tarapacá como son: Gros Colman, País, Ahmeur bou Ahmeur y Torrontés Riojano.
8. Que, el vino producido, en Pozo Almonte, Pica y otras localidades de la Provincia del Tamarugal, es resultante de la adaptación de material genético de las vides a las condiciones de desierto extremo y de labores culturales ajustadas a los requerimientos edafoclimáticos del territorio, lo que constituye un sello sociocultural y, terroir exclusivo en los vinos allí producidos.
9. Que, el Gobierno Regional de Tarapacá ha brindado su decidido apoyo a las iniciativas referidas, reconociendo que la producción vitivinícola forma parte de la identidad regional y comprometiéndose con su desarrollo, toda vez que, junto con generar un sello identitario, su producción resulta una expresión territorial de la recuperación y puesta en valor de la historia productiva vitivinícola de la región.
10. Que, en los términos del oficio ordinario N° 247 de 2019 dirigido a la Comisión de Agricultura del H. Senado, la reserva del genérico “Vino del Desierto” puede facilitar en el corto plazo la posterior obtención de la Denominación de Origen a la totalidad de los vinos producidos y elaborados en la zona.

#### **RESUELVO:**

1. Asignase como nueva clasificación en el Registro de Bebidas Alcohólicas del Servicio Agrícola y Ganadero, el genérico “Vino del Desierto”, cuyo nombre se reserva para el vino genuino producido y elaborado en la Provincia del Tamarugal, de la Región de Tarapacá, por la Universidad Arturo Prat y por pequeños productores agrícolas, proveniente de cepas señaladas en el punto siete y que se comercialice en unidades de consumo, pudiendo señalar con el genérico, su cepaje y año de cosecha.

2. Para los efectos dispuestos en el numeral anterior, se considerará pequeño productor agrícola a aquél que explote una superficie no mayor a cinco hectáreas de riego básico; cuyos activos no superen las tres mil quinientas unidades de fomento y cuyos ingresos provengan principalmente de la explotación agrícola y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen de tenencia. Estas exigencias no resultarán aplicables a la Universidad Arturo Prat.
3. El pequeño productor de “Vino del Desierto” deberá acreditar esa condición ante el Servicio acompañando a la inscripción del vino de que se trate, un certificado de avalúo fiscal otorgado por el Servicio de Impuestos Internos; Carpeta Tributaria o Declaración Jurada que acredite que sus activos no superan las tres mil quinientas unidades de fomento, y que sus ingresos provienen principalmente de la explotación agrícola.
4. Sólo podrán inscribir el vino bajo la categoría denominada “Vino del Desierto” en el Registro de Bebidas Alcohólicas, los productores y elaboradores vitivinícolas que estén registrados ante el Servicio en los términos referidos en los considerandos 7° y 8° de esta resolución, los que en todo caso deberán comunicar al Servicio Agrícola y Ganadero su intención de vinificar con al menos quince días de anticipación al inicio de la vendimia del año de que se trate;
5. Finalmente, los productores y elaboradores de “Vino del Desierto” deberán cumplir con las mismas exigencias analíticas, calificaciones, adición de sustancias y manipulaciones permitidas para la vinificación y elaboración del vino, así como las disposiciones establecidas en materia de declaración de existencia y cosecha de vinos, registro de bodegas, etiquetado y comercialización de bebidas alcohólicas.

DIRECTOR NACIONAL  
SERVICIO AGRÍCOLA Y GANADERO

**PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 74 DE LA LEY ORGÁNICA  
CONSTITUCIONAL DE MUNICIPALIDADES, RESPECTO DE LAS  
INHABILIDADES DE LOS CONSEJEROS REGIONALES PARA SER  
CANDIDATOS A ALCALDE Y CONCEJAL.**

**BOLETÍN Nº 12.524-06**

**Repone la siguiente indicación:**

➤ La **indicación número 6** de la Senadora Ebensperger:

“Artículo...- Modifícase el D.F.L. Nº 1 de 2005, que fija el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizado de la ley Nº 19.175, orgánica constitucional sobre Gobierno y Administración Regional, de la siguiente manera:

1) Elimínase en el inciso final del artículo 23 ter la referencia a la letra “c”).

2) Agrégase al artículo 23 ter el siguiente inciso final:

“Tratándose de las inhabilidades de la letra c) serán aplicables al alcalde o concejal que detente ese cargo los treinta días anteriores a la elección de gobernador regional.”.

3) Elimínase de la letra a) del artículo 32 la frase “alcaldes y concejales”.

4) Agrégase al artículo 32 una nueva letra f), del siguiente tenor:

“f) Los alcaldes y concejales que detenten esos cargos los treinta días anteriores a la elección respectiva.”.”.

**LUZ EBENSPERGER ORREGO**

**SENADORA**



H. Senadora Luz Ebensperger Orrego

Valparaíso 2 de octubre de 2019.

**H. SENADOR ÁLVARO ELIZALDE SOTO**  
**PRESIDENTE COMISIÓN DE MINERÍA Y ENERGÍA H. SENADO**  
**PRESENTE.**

Estimado Senador:

Junto con saludarle y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 132 de esta Corporación, vengo en retirar la totalidad de las indicaciones que formulé al Proyecto de Ley sobre Protección de Glaciares (Boletines N° 4.205-12 y 11.876-12, refundidos) y que rolan bajo los números 1, 2, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 23, 25, 27, 30, 31, 34, 36, y 38 del Boletín de Indicaciones de 28/06/2019.

Sin otro particular,

**LUZ EBENSBERGER ORREGO**  
**SENADORA REGIÓN DE TARAPACÁ**



*Valparaíso 23 de octubre de 2019.*

H. Senador Jaime Quintana Leal.

Presidente del H. Senado

Presente

De nuestra consideración:

Por la presente los Senadores de la Unión Demócrata Independiente venimos en solicitar conforme al artículo 9º de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional se oficie a:

- a). A Cada uno de los Jefes de la Defensa Nacional referente al número y entidad de las denuncias referentes a saqueos, hurtos y robos, así como la destrucción de propiedad e infraestructura pública.
- b). Al Ministerio de Transporte referente al número de estaciones de metro dañadas y destruidas, monto aproximado del daño y fecha de reapertura de cada estación, así como el número de estaciones de buses, paraderos de red destruidos e inutilizados, microbuses y demás infraestructura asociada.
- c). Al Ministerio de Salud referente al número de heridos y atenciones de urgencia consecuencia directa de en particular a tercera edad y niños y adolescentes
- d). Al Instituto Nacional de Derechos Humanos referente al número de denuncias que ha recibido y que ha efectivamente corroborado y el procedimiento que ha utilizado para contrarrestar cada una de las denuncias.

Sin otro particular;



Senadores Comité Unión Demócrata  
Independiente.